

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, nueve (9) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio No. 05

MAGISTRADA PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO BERNAVIDES

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2020-01426-00
EJECUTANTE:	MANUEL ALIRIO VALENCIA GONZALEZ Y OTROS Correo Apoderada: silvanamm1116@hotmail.com
EJECUTADO:	HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Correo: hospitaldaqua@gmail.com joserufinovivas@telecom.com.co
ASUNTO	LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Expediente Ordinario 76001233100020070057400

I. PUBLICIDAD

Por Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020 se levantó la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura entre el 16 de marzo y el 31 de junio de 2020. En tal virtud:

El canal oficial de comunicación e información para recibir memoriales únicamente para este asunto es rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co

Las partes informarán el canal digital elegido para surtir las actuaciones y notificaciones del presente proceso. **En su defecto se tomarán como tales los correos electrónicos que obran en el proceso y en el SIRNA.**

II. IMPULSO

Decide el despacho si existe mérito para librar mandamiento de pago en contra del HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, en virtud de la demanda ejecutiva presentada por los señores MANUEL ALIRIO VALENCIA GONZÁLEZ, LEONARDO VALENCIA, ANA MARLY VALENCIA GONZÁLEZ Y JOSE UNFREDO VALENCIA GONZÁLEZ, quienes actúan a través de apoderada judicial debidamente constituida.

1. ANTECEDENTES

La obligación que se pretende recaudar se sustenta en la sentencia del 2 de mayo de 2018, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado en la demanda de reparación directa radicada 76001-23-31-000-2007-00574-00 - notificada por edicto desfijado el 6 de agosto de 2018 (fl. 512), donde se decidió:

“REVOCAR la sentencia del 11 de junio de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Y en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR que el **HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** es administrativa y patrimonialmente responsable de los



daños y perjuicios sufridos por los demandantes, como consecuencia de la muerte de Manuel Salvador Valencia, ocurrida el 12 de julio de 2005.

SEGUNDO: CONDENAR al HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO a pagar por concepto de perjuicios morales en favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero:

Nivel	Demandante	Calidad	Cuantía Reconocida
1	Manuel Alirio Valencia González	Hijo	100 SMLMV
1	Leonardo Valencia	Hijo	100 SMLMV
1	Ana Marilly Valencia González	Hijo	100 SMLMV
1	José Unfredo Valencia González	Hijo	100 SMLMV

TERCERO: ABSOLVER de responsabilidad administrativa y patrimonial al HOSPITAL JOSÉ ANTONIO NARIÑO – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (hoy en liquidación a cargo del Ministerio de Salud y de la Protección Social – departamento de entidades liquidas) conforme lo expuesto en esta providencia.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Negar las pretensiones expuestas en el llamamiento en garantía.

SEXTO: Sin condena en costas”

El expediente regresó del Consejo de Estado el 7 de septiembre de 2018 (Fl. 517) y la secretaria lo remitió al Despacho 03, que lo envió a reparto en la oficina de apoyo (Fl. 519). El acta de reparto al Despacho 11 es de 9 de octubre de 2018 (Fl. 521).

Por auto de 7 de diciembre de 2018 se dictó auto de estar a lo resuelto por el superior (Fl. 523). El 19 de diciembre de 18 se expidieron copias para la ejecución (Fl. 526).

El 29 de noviembre de 2019 la apoderada de la parte ejecutante radicó memorial en el cual solicitó “continuar el trámite” (Fl. 527). Por correo electrónico de 13 de noviembre de 2020 insistió en su solicitud528 y 529).

La Secretaria pidió a la Oficina de Apoyo asignar una radicación al juicio ejecutivo derivado de la sentencia el 13 de noviembre de 2020 (Fl. 530), lo cual se cumplió el 17 de noviembre de ese año con el radicado 76001-23-33-000-2020-01426-00 (Fl. 4 Cuaderno 1 del Juicio Ejecutivo).

2. CONSIDERACIONES.

A. COMPETENCIA

Si bien es cierto el numeral 7 del artículo 152 del CPACA atribuye la competencia de la Corporación para conocer de procesos ejecutivos, en principio en razón de la cuantía, la Sala acoge el criterio de conexidad expuesto en providencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado con ponencia del Consejero William Hernández Gómez dentro el expediente A.I. 0-001-16 y asume el presente asunto en PRIMERA INSTANCIA por cuanto ésta Sala profirió la sentencia objeto de ejecución.

De otra parte, se resalta que la abogada del caso no radicó demanda ejecutiva, sino que pidió la ejecución al interior del juicio ordinario.

Al respecto el Consejo de Estado, en auto de 2015 había considerado¹:

¹ SECCION SEGUNDA



Los incisos 1° y 2° del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, consagran la posibilidad de cobrar ejecutivamente una sentencia de condena ante el mismo juez que la profirió y sin necesidad iniciar un proceso ejecutivo independiente, siempre y cuando la solicitud de ejecución sea presentada dentro de los sesenta (60) días siguientes a su ejecutoria.

Para la Sala la mencionada norma no es aplicable al caso de la demandante porque de conformidad con los artículos 87, 132, 134B y 136 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, antes analizados, para la ejecución de providencias de condena contra entidades públicas proferidas por la jurisdicción contenciosa administrativa, existen reglas claras y expresas según las cuales el conocimiento del proceso ejecutivo corresponde a esta misma jurisdicción previo ejercicio de la acción ejecutiva contenciosa administrativa, lo cual implica la presentación de una demanda que debe ser sometida a reparto y evaluada conforme a los requisitos procesales de la acción, entre ellos la caducidad.

Y en providencia de 2016, por importancia jurídica, la Sección Segunda, concluyó:

“Ahora bien, en el caso de los procesos fallados en vigencia del régimen anterior, esto es, el Decreto 01 de 1984, pero cuya ejecución se inició bajo las previsiones del CPACA, el procedimiento a seguir es el regulado en este último y en el CGP, puesto que pese a que la ejecución provenga del proceso declarativo que rigió en vigencia del Decreto 01 de 1984, el proceso de ejecución de la sentencia es un nuevo trámite judicial”².

Sin embargo, para evitar mayores dilaciones, la corporación entrará a analizar directamente la viabilidad de librar mandamiento de pago pese a que no se presentó demanda en sentido estricto.

B. DEL PROCESO EJECUTIVO Y EL TÍTULO EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA:

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA³ establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el

SUBSECCION B

C.E. CP. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ. 29 de enero de 2015. Rad. 05001-23-31-000-2001-01115-02(2231-14). Actor: GLORIA EUGENIA VALENCIA CORREA. Demandado: MUNICIPIO DE URRAO – ANTIOQUIA. Acción: Solicitud de ejecución – Decreto 01 de 1984.

² CE. Sección Segunda. Rad. 11001-03-25-000-2014-01534 00 Número Interno: 4935-2014 Medio de control: Demanda Ejecutiva Actor: José Aristides Pérez Bautista Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Auto interlocutorio I.J1 . O-001-2016

³ Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.



acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato - que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual - o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y (iv) las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP⁴ establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: (i) un documento que provenga del deudor o de su causante; (ii) una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; (iii) las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y (iv) los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva **es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo**, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

C. CASO CONCRETO.

La ejecución que se pretende encuentra su causa jurídica en la sentencia del 2 de mayo de 2018 proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado.

Es un título simple⁵ pues se encuentra constituido por la sentencia condenatoria ejecutoriada y se encuentra en término para solicitar su ejecución.

En tal sentido, existe título ejecutivo pues en la sentencia consta una obligación clara, expresa y exigible, ya que condenó a favor de los ejecutantes y a cargo de la ejecutada una suma determinable de dinero, por tanto, se acreditan los elementos necesarios y suficientes para librar mandamiento de pago.

D. RECONOCIMIENTO DE INTERESES.

Se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 192 del CPACA, de conformidad con los criterios que a continuación se señalan:

“Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.

(...)

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva,

⁴ Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de dos (2) de abril de 2014, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, expediente No. 11001032500020140030200 “Por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez. En el último caso, la acción ejecutiva se promueve porque la sentencia del juez no fue cumplida. (...)”.



cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud”.

Por lo anterior y una vez estudiada la presente demanda ejecutiva por el despacho, se evidencia que esta reúne los requisitos de los artículos 82, 83 y siguientes del CGP y contiene título con los requisitos legales conforme al artículo 422 Ibídem.

En consecuencia, el despacho dando cumplimiento al artículo 430 del CGP por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

RESUELVE

PRIMERO: ASUMIR el conocimiento del juicio ejecutivo en este proceso pese a que no se presentó demanda en forma, en garantía del acceso a la administración de justicia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de las siguientes personas quienes obra a través de apoderada judicial, por los siguientes valores:

- Para el señor Manuel Alirio Valencia González la suma de 100 SMLMV, equivalentes a OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$82.811.600).
- Para el señor Leonardo Valencia la suma de 100 SMLMV, equivalentes a OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$82.811.600).
- Para la señora Ana Marlly Valencia González la suma de 100 SMLMV, equivalentes a OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$82.811.600).
- Para el señor José Unfredo Valencia González la suma de 100 SMLMV, equivalentes a OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$82.811.600).

TERCERO: La condena en costas y agencias en derecho se efectuará conforme a lo probado en el proceso.

CUARTO: Se **ADVIERTE** que las sumas ordenadas en los numerales anteriores y el reconocimiento y pago de intereses serán nuevamente objeto de revisión dentro de la oportunidad procesal pertinente.

QUINTO: ORDENAR a la parte ejecutada, que de conformidad con el artículo 431 del Código General del Proceso, **deberá cancelar las anteriores sumas a la parte demandante dentro de los cinco (5) días siguientes al presente proveído, o en su defecto, proponer excepciones en el término de diez (10) días siguientes a la presente decisión.**

SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente proveído a la entidad ejecutada **HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**, al Ministerio Público⁶ y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por estado a la parte ejecutante, corriéndole traslado conforme los términos del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con los artículos 431 y 442 del C.G.P. **La notificación se efectuará remitiendo**

⁶ Artículo 171 No. 2 del CPACA



Radicación : 76001-23-33-000-2020-01426-00
Medio de control : EJECUTIVO
Ejecutante : MANUEL ALIRIO VALENCIA GONZÁLEZ Y OTROS
Ejecutado : HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

6

mensaje de datos al correo electrónico⁷ para notificaciones judiciales de las entidades y al mensaje se adjuntará la demanda y sus anexos digitales o el vínculo para consultarlos o se insertarán en el aplicativo SIGLO XXI o SAMAI para su consulta.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
Magistrada

Elab. Yurani Lopez
Vo.Bo. Secretario

⁷ Artículo 197 inc. 2 CPACA concordado art. 612 C.G.P.